

Caos en Bolivia

Una feroz disputa política entre Evo Morales y su exaliado y delfín, el Presidente Luis Arce, con una agudísima crisis económica de telón de fondo, constituye el contexto de la farsesca insurrección militar ocurrida en Bolivia. Una asonada que despierta suspicacias por las fallas evidentes en la operación y las poco claras intenciones del líder militar que la encabezó, ahora detenido junto a otros militares y civiles. Este panorama da cuenta de una situación de inestabilidad política producto de una debilidad institucional y de una lucha de personalidades que amenazan lo que queda de la frágil democracia altiplánica.

Se especula sobre las motivaciones del ex comandante en jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, quien forzó las puertas del Palacio Quemado con una tanqueta, conversó cara a cara con Arce, se retiró y más tarde fue aprehendido. Si bien en un momento él llegó a anticiparles a los periodistas planes de reestructurar la democracia y dijo que habría un nuevo gabinete, no hay en realidad certezas de cuál era su objetivo final. Bien puede descartarse que fuera el de la toma del poder: sin más fuerza que unos 200 soldados, y sin las unidades militares del país detrás de él, la intentona iba destinada al fracaso. Esto ha hecho levantar sospechas sobre un eventual "autogolpe" que desde el gobierno se encargan de desmentir, pero sin despejar las dudas ni de la oposición ni de los partidarios de Morales.

Son muchos los cabos sueltos para entender qué ocurrió el miércoles en La Paz. El militar era un hombre supuestamente cercano a Arce y promovido por este, pero al parecer no compartía toda la visión ideológica del gobierno. De hecho, en declaración durante la asonada, habló de liberar a los presos políticos, incluida la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador cruceño Fernando Camacho, opositores férreos. Pero, por otra parte, era conocida su animadversión hacia el

mayor enemigo de Arce, Evo Morales, de quien llegó a decir esta semana, en una entrevista televisiva, que "no puede volver a ser presidente porque está legalmente inhabilitado" y que lo detendría si lo intentaba. Tal fue su reacción luego de que el líder cocalero lo acusara de haber estado fraguando una operación para "bajarlo" (asesinarlo). Dicha entrevista es precisamente la que habría desencadenado la crisis, pues, ante sus dichos, a Arce no le habría quedado más que destituirlo, a lo que Zúñiga aparentemente se resistió.

Lo equívoco del episodio es otro signo de la crisis que vive Bolivia, en la cual se confunden las intenciones de los distintos actores políticos, donde Arce se encuentra arrinconado entre los opositores tradicionales de la centroderecha, como Camacho, Carlos Mesa o Manfred Reyes, y Evo Morales, quien lidera una fracción del MAS que domina la mayoría parlamentaria, y tiene un arrastre popular que le permite agitar protestas y

bloqueos de rutas que inmovilizan al país. En 2023 hubo 187 de estos bloqueos, con un promedio de tres días y medio, según la Cámara de la Industria. Mientras, la población está descontenta por las alzas de precios, la falta de dólares y de perspectivas futuras, con la economía sufriendo los efectos de la baja producción de hidrocarburos, su fuente principal de financiamiento.

Así, Arce ha visto caer su popularidad y con ella la posibilidad de ganar las elecciones de 2025. La versión de un autogolpe surgió del propio Zúñiga, quien, luego de ser detenido, reveló una supuesta conversación con el Presidente en la cual este le habría dado el pase para "sacar blindados", a fin de mejorar su "jodida situación" y subir su popularidad. En apariencia, el Presidente salió fortalecido de este *putsch*, pero es incierta la duración de este efecto si la situación económica no mejora, lo que es improbable. Mientras, su hoy archienemigo, Morales, persiste en su empeño de volver a la Presidencia.

Lo ocurrido el miércoles es otro signo de la aguda crisis que está viviendo la frágil democracia boliviana.